

REFORMISMO EN AVILA EN EL SIGLO XVIII: EL ARBITRIO SOBRE LOS PASTOS DE LOS BALDÍOS

Gonzalo MARTÍN GARCÍA

1. — REFORMISMO EN AVILA EN EL SIGLO XVIII

Tras la profunda y prolongada crisis de la centuria precedente, el siglo XVIII representa para España, a pesar de la existencia de evidentes asincronías sectoriales y regionales, una etapa de recuperación, de reactivación histórica y de desarrollo cuantitativo. Lo reflejan claramente todos los indicadores económicos: creció la población¹, aumentó la producción agraria, tanto por la roturación de tierras yermas o abandonadas como por un desplazamiento hacia arriba, limitado pero real, de la productividad², evolucionó la industria, especialmente la industria textil³, y se acrecentaron los intercambios comerciales, tanto entre la metrópoli y las colonias americanas como entre las distintas regiones del país⁴. El ritmo de crecimiento, lento al principio, fue haciéndose progresivamente acelerado: la primera mitad del siglo se presenta como un periodo de recuperación, de superación de la decadencia y de afianzamiento de bases, que daría paso, inmediatamente después, a una etapa de expansión en que se multiplican las reformas, las iniciativas de todo tipo y las actividades económicas.

Ciertamente, la evolución ascendente de la España del setecientos estuvo basada y fundamentada en la existencia previa de tendencias propicias al desarrollo y de condi-

¹ Ver ROMERO DE SOLIS, P.: "La población española en los siglos XVIII y XIX", Madrid, 1973; PEREZ MOREDA, V.: "Las crisis de mortalidad en la España interior", Madrid, 1980; NADAL OLLER, J.: "La población española (siglos XVI a XX)", Barcelona, 1984; BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: "La población española en la segunda mitad del siglo XVIII" en Moneda y Crédito, 123 (1972); EIRAS ROEL, A.: "Problemas demográficos del siglo XVIII" en "España a fines del siglo XVIII", Tarragona, 1982.

² ANES ALVAREZ, G.: "Las Crisis agrarias en la España Moderna", Madrid, 1970; Idem: "Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII", Barcelona, 1972; TORTELLA CASARES, G.: "Los Orígenes del capitalismo en España, Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX", Madrid, 1975, 1.

³ GONZALEZ ENCISO, A.: "Estado e Industria en el siglo XVIII: La fábrica de Guadalajara", Madrid, 1980.

⁴ NADAL, J. y TORTELLA, G. eds: "Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico de la España contemporánea", Barcelona, 1974; GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: "Comercio Colonial y Guerras Revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana", Sevilla, 1972; MARTÍNEZ SHAW, J.: "La procedencia de los capitales de la industria naviera catalana del siglo XVIII: Los barcos del comercio atlántico (1742-1752)" en "Anuario de Estudios Americanos", XXX, 1973, pp. 471-488; PALACIO ATARD, V.: "El Comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII. Notas para su estudio", Madrid, 1960; RINGROS-SE, D.: "Los transportes y el estancamiento económico de España (1750-1850)", Madrid, 1972.

ciones coyunturales favorables⁵, pero no cabe duda de que dicha evolución fue promovida en gran manera, y potenciada e impulsada por la decidida acción reformadora del Estado. Hubo veces en que las iniciativas estatales nacieron para dar respuesta a exigencias derivadas del propio proceso de crecimiento —y podríamos citar como ejemplo la relación existente entre las leyes proteccionistas y la expansión de la industria algodonera catalana—, pero también hubo ocasiones y sectores de actividad económica y social en que tales iniciativas hubieron de erigirse en el principal, cuando no en el único, y exclusivo factor de desarrollo. En cualquier caso, la actuación del Estado pretendió llegar a todas las facetas y a todos los aspectos de la vida nacional: en ese afán de progreso y de renovación generalizada radica la importancia histórica del reformismo.

El fenómeno fue especialmente intenso durante el reinado de Carlos III. La repoblación de comarcas desertizadas; la libertad de comercio de granos, el impulso a la rotación de las tierras labrantías, la protección a los establecimientos industriales, la concesión de exenciones y franquicias a la producción, la libertad de fabricación, la liberalización del comercio con América, los intentos de potenciar la cultura y la tecnología, la secularización de la beneficencia, la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País y otras muchas medidas reformadoras, puestas en marcha por los hombres de la Ilustración, potenciaron el desarrollo de la agricultura, de la industria, del comercio, de las comunicaciones, de la educación y de todo el sistema económico en general. Es verdad que el crecimiento tuvo lugar básicamente dentro de los cauces tradicionales, que las transformaciones fueron poco profundas, que muchas de ellas llegaron demasiado tarde⁶ y que al finalizar el siglo las estructuras económicas no habían experimentado ningún cambio sustancial, pero no es menos cierto que las reformas proyectadas, eficaces o no, sirvieron para poner de manifiesto las inadecuaciones, los defectos y el agotamiento de las fórmulas vigentes en el Antiguo Régimen y provocaron tensiones sociales y fracturas ideológicas que, sin alumbrar aún formulaciones nuevas, preludiaban los cambios estructurales que habrían de producirse en el siglo XIX.

En efecto, la ciudad de Avila se encontraba aún en las décadas centrales del XVIII sumida de lleno en un proceso secular de declive. Su influencia se dejó notar en todo el ámbito de la geografía nacional, tanto en la periferia, donde hubo sectores económicos y comarcas o ciudades que experimentaron un crecimiento espectacular, como en las regiones del interior, que habían sufrido con mayor intensidad las consecuencias negativas de la crisis del siglo XVII⁷. El ejemplo de Avila, setecientos y el contraste de todo ello con el dinamismo histórico que experimenta la ciudad en la segunda mitad de la centuria, puede ser, en este sentido, bastante esclarecedor.

En efecto, la ciudad de Avila se encontraba aún en las décadas centrales del siglo XVIII sumida de lleno en un proceso secular de estancamiento y de postración económica y social. La despoblación —5.481 habitantes en 1751, incluidos 369 religiosos setema productivo eran las manifestaciones más significativas de una decadencia tan evidente como lamentable⁸. Las Actas Consistoriales de esos años apenas reflejan otra actividad municipal que la mera atención a los asuntos rutinarios. Pronto, sin embargo, la ciudad comenzaría a recibir el influjo benéfico del reformismo y, a partir de la década de

⁶ GONZÁLEZ ENCISO, A.: "España y USA en el siglo XVIII. Crecimiento industrial", Valladolid, 1979, p. 59.

7 VV.AA.: "Historia de Castilla y León", 7, "La época de la ilustración", pp. 344 ss.

Vol. 8: "La Ilustración: una recuperación incompleta (siglo XVIII)", Valladolid, 1986.

MARTÍN GARCÍA, G.: "Nacimiento de una industria textil en Avila en el siglo XVIII", Avila, 1983, pp. 15 y ss.

... de una industria textil en Avila en el siglo XVIII. La Real Fábrica de algo-

los sesenta, unas veces como concreción inmediata de la política gubernativa, otras por iniciativa particular de ciudadanos imbuidos del espíritu de la Ilustración¹⁰ y casi siempre motivadas por la necesidad de cambio o por las deficiencias y desajustes del sistema, se efectúan reformas, se crean instituciones y surgen industrias y proyectos que sirvieron para fomentar el trabajo y la riqueza y consiguieron mejorar, aunque sólo temporalmente y de forma intermitente, el nivel de vida de los abulenses.

En el campo de la educación y la cultura, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas tuvo como consecuencia inmediata la secularización de la enseñanza¹¹ y el establecimiento de escuelas públicas de primeras letras y cátedras de latinidad y matemáticas en el antiguo Palacio Episcopal, que previamente había abandonado el Prelado para trasladar su residencia al edificio en que estuvo ubicado el Colegio de la Compañía de Jesús¹². En el mismo sentido, y con objeto de mejorar la beneficencia, se reunieron, después de un prolongado litigio que mantuvieron por tal motivo el Comisionado regio, D. Juan Meléndez Valdés y el Clero de la ciudad¹³, los cinco hospitales que existían en Avila —La Magdalena, La Misericordia, San Joaquín, Santa Escolástica, Dios Padre en un Hospital Único y General¹⁴— y se intentó fundar un Hospicio o Casa de Misericordia para recoger a gentes desocupadas y enseñarles algún oficio para que pudieran ganarse la vida con su trabajo¹⁵.

También aumentó considerablemente la actividad municipal. Se planificó la remodelación de la Plaza Mayor (Mercado Chico) —proyectos de Ventura Rodríguez y de Juan Antonio Cuervo¹⁶—, se empedraron calles¹⁷, se proyectó la construcción de la nueva Cárcel¹⁸, se hicieron reparos continuos en El Alcázar, se reedificó el Seminario Provincial¹⁹, y, lo que es más importante, se reformó la composición del propio Ayuntamiento mediante la elección y nombramiento, a partir de 1776, de seis regidores naturales de la ciudad²⁰.

Poco tiempo antes, por Real Orden de 31 de enero de 1774, se había establecido en Avila, en la Casa de Núñez Vela, bajo la dirección del Inspector General de Infantería, Conde de O'Reilly, una Escuela Militar para las Armas de Infantería y Caballería con objeto de formar "oficiales de sobresaliente capacidad, buena conducta y genial disposi-

¹⁰ Es preciso tener en cuenta, en tal sentido, la presencia en Avila durante este periodo de ilustrados eminentes tales como Jovellanos, estudiante de la Universidad de Santo Tomás; o Menéndez Valdés, comisionado regio para la Reunión de Hospitales. Y también Obispos como Romualdo Velarde o Fray Julián Gascuña o eclesiásticos como D. Baltasar de Lezaeta o los hermanos Cuesta. Y algún tiempo después el escritor piedrahiteño D. José Somoza. Ver RUIZ LAGOS, M.: "Avila y Jovellanos. Datos para una biografía", Avila, 1966; Idem: "El escritor D. José Somoza. Ensayo literario sobre su vida y obra", Avila, 1966; Idem: "Liberales en Avila. La crisis del Antiguo Régimen (1790-1840). Cuesta. Tapia y Larra", Avila, 1967.

¹¹ Se establece en Avila una Junta Municipal de Educación integrada por el Intendente, el Alcalde Mayor, un Regidor, un párroco, el diputado de abastos y el Procurador Síndico General del Común. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Consejos, 1279.

¹² AHPA. Ayuntamiento. Actas Consistoriales, 18 de febrero de 1775.

¹³ Ver DEMERSON, G.: "Don Juan Maléndez Valdés, correspondance relative à la Reunion des Hospitaux d'Avila", Burdeos, 1964.

¹⁴ AHN, Consejos, 832, 2086, 2087, 2088, 2089.

¹⁵ ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS), Secretaría de Hacienda, 254.

¹⁶ Ver CERVERA VERA, L.: "La Plaza Mayor de Avila (Mercado Chico)", Avila, 1982; GUTIÉRREZ ROBLEDO, J.L.:

¹⁷ AHN. Consejos, 1382, 7 y 9.

¹⁸ AHN, Consejos, 1744.

¹⁹ GUTIÉRREZ ROBLEDO, J.L.: "Sobre las reformas arquitectónicas del seminario abulense de San Millán entre 1793-1797", en "Cuadernos Abulenses", 5, 1986, p. 120 y ss.

²⁰ AHN, Consejos, 1279.

ción para el arte de la guerra...²¹. Vinieron dos o tres oficiales de Infantería, algunos de Caballería y tres o cuatro de Ingenieros y el Regimiento de Navarra, para hacer las maniobras correspondientes²². Su inmediata desaparición —ya no existía en el año 1776— privó a la ciudad de los beneficios que para la riqueza urbana y rural, para la artesanía y el comercio, hubiera significado su consolidación.

Más interesantes aún fueron, sin duda, las medidas encaminadas directamente a la creación de puestos de trabajo, a relanzar la economía y a restablecer la industria textil, único medio para mejorar el nivel económico y social de la ciudad. Es preciso hacer notar, en este sentido, la creación de una Sociedad Económica de Amigos del País de Avila²³, los intentos llevados a cabo para fundar un Hospicio o Casa de Misericordia²⁴, la imposición de arbitrios sobre los Baldíos de la ciudad y Tierra y, fundamentalmente, el restablecimiento de las manufacturas industriales.

La fundación de la Fábrica de Paños del Común, puesta bajo la dirección de D. Patricio Boulger, su evolución y su fracaso, así como la creación de establecimientos particulares tales como las fábricas de paños de D. Francisco Solernou o de D. Rafael Serrallonga, y la problemática y desarrollo histórico de la Real Fábrica de Hilados y Tejidos de algodón son cuestiones que ya hemos abordado en trabajos anteriores²⁵. Pero existen en esta época, como acabamos de ver, otros asuntos de interés y otros factores socioeconómicos que reflejan y, a la vez, contribuyen a conformar el entramado histórico de la ciudad. Por su importancia, y también por su significación, pretendemos ahora estudiar la imposición del arbitrio sobre los Pastos de los Baldíos y analizar sus causas, sus problemas, los caudales que produjo dicho arbitrio y su inversión, y las consecuencias que todo ello tuvo para los habitantes de la ciudad y para los vecinos de los pueblos de la Universidad de la Tierra.

2.—IMPOSICION DEL ARBITRIO SOBRE LOS PASTOS DE LOS BALDIOS

2.1.—Los Baldíos de la ciudad y Tierra de Avila

Designamos con la acepción *Baldíos de la ciudad y Tierra de Avila* a una extensa superficie de tierras de dominio público²⁶, situadas en las serranías de la provincia y, por

lo general, dedicadas desde siempre a monte bajo, pinares y pastizales²⁷. Estaban constituidos en el siglo XVIII por los sitios denominados: Valle de Irietas, Quintanar, La Sierra, La Mata, Navalanguilla, Gaznata, Garrovera, El Villar, La Bardera, Valdiguéolo, Llanillos y algunos predios —hasta el número de cuarenta y uno— de menor importancia y extensión²⁸. En conjunto sumaban cerca de 20.000 hectáreas —poco más o menos de catorce leguas cuadradas²⁹—, la mayor parte de las cuales estaban enclavadas en terrenos que se extienden desde el pueblo de Mengamuñoz hasta Las Navas del Marqués y desde la localidad de Riofrio hasta el término de El Tiemblo³⁰.

Pertenecían a la Universidad de la ciudad y pueblos de los siete sexmos de la Tierra de Avila³¹, mancomunidad de origen medieval nacida en los tiempos de la Repoblación para la defensa en común y el aprovechamiento comunitario de montes y pastizales³²,

²⁷ Sobre la evolución histórica de la Universidad de la Ciudad y Tierra de Avila y las vicisitudes que afectan a la posesión y aprovechamiento de los "baldíos", ver MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad de la ciudad y Tierra de Avila. Bosquejo histórico del mismo y reglamento por que ha de regirse su Junta Administrativa", Avila, 1919.

²⁸ Cabe citar, entre otros, varios predios en Navaserrada, Valdegarcía, Hoyo, Casas del Parejón, Pasarilla, Duero, Vacaconcha, Regalejos, Peñalbuitre, Artuñeros, Gargante de Gallegos, Serrones, El Molinillo, El Chorrillo, La Ceñuela, Porquerizos, Naharrillos, Saornil de Adaja, Mañas, Hernansancho, San Pascual, Mazales, Malucos, Las Navas de Guisando, Sopas Calientes, Peñaorcón, Aldehuelas, El Cerro, Hoya de San Miguel, El Otero, Marivida, Villarta, San Bartolomé de Mañas,... ARCHIVO HISTÓRICO DEL ASOCIO (AHA), "Escritura de venta y perpetuación de los Valdíos a favor de la Ciudad y Tierra y Transacción sobre las pretensiones del Fiscal", 1741; AHN, Hacienda, 2126, Expte. de excepción promovido por el Administrador del Asocio en 1863; AHPA, Ayuntamiento, C 15 L4/8.

²⁹ AHPA, Ayto., C 122 43/10, Dictamen de los Regidores de Avila de 23 de noviembre de 1868, f. 212. Los sitios más extensos eran La Sierra, en término de Sotalbo, con una superficie de 7.091 hectáreas; el valle de Iruelas, con 7.500 hectáreas; San Pedro del Heliar, con 809 y San Bartolomé de Mañas, con 300. MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la Extinguida Universidad..." op. cit., p. 32-33.

³⁰ Molinero Fernández nos informa sobre sus límites y sus enclaves: "...la mayor parte de los bienes se hallan enclavados en la Sierra desde Mengamuñoz a Las Navas y desde Riofrio al Tiemblo según puede verse por el apeo y deslinde hecho en el año 1527 y cuyos términos tocan con Riofrio, Mengamuñoz, La Lastra, Navalacruz, Los Valdíos, El Burgo, Navalsauz, Navaslanas, Valle de la Pabona, Cebreros, Navaserrada, Navalenguilla, Hoyo y Navaserrada, Quejigal, Heliar, Tiemblo, Quintanar, San Bartolomé, Gotarrendura, San Pascual, Cabizuela, Galindos, Montalvo, Valdío de Las Lagunas, Quemadilla, Navalmorales y Herradón,..." MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad..." op. cit., p. 17.

³¹ Ver los pueblos que constituían la Universidad de la Tierra en MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio...", op. cit., p. 11 ss.

³² MANGAS NAVAS, J.M.: "Régimen Comunal Agrario de los Concejos de Castilla", Madrid, 1981, p. 19; BELMONTE DÍAZ, J.: "La ciudad de Avila. Estudio histórico", Avila, 1986, p. 109, 110; MARTÍNEZ DÍEZ, G.: "Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana", Madrid, 1983, p. 9 y ss.

Abandonadas incomprensiblemente por la investigación histórica, son pocos los estudios realizados sobre las denominadas comunidades de Villa y Tierra. Entre las más interesantes, además de las citadas, cabe destacar: LECEA Y GARCÍA, C.: "La Comunidad y Tierra de Segovia. Estudio histórico legal acerca de su origen, extensión, propiedades, derechos y estado presente", Segovia, 1893; MOLINERO PÉREZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad..." op. cit.; SOLER Y PÉREZ, F.: "Los comunes de Villa y Tierra y especialmente el del señorío de la Corona de Aragón. Otras instituciones de derecho consuetudinario y economía popular de la misma comarca", Madrid, 1921; MONTALVO, J.J. de: "De la historia de Arévalo y sus sexmos", Valladolid, 1928; REPRESA, A.: "Las Comunidades de Villa y Tierra antiguas de Cuéllar (siglos XIII-XVI)", DRICH, J.: "La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda durante la Edad Media", A.E.M., n° 8, 1972-73; BERNAL MARTÍN, S.: "Soria y las Comunidades de Villa y Tierra" en "Celtiberia", n° 52 (1976), pp. 261-284; CORRAL GARCÍA, E.: "Las Comunidades castellanas y la Villa y Tierra antigua de Cuéllar (siglos XIII-XVI)", Salamanca, 1978; DELGADO MARTÍNEZ, M.C.: "Apuntes sobre la vida rural de la Villa y Tierra de Yanguas (Soria), siglos XII-XVI", Soria, 1981; GARCÍA DE ANDRÉS, L.: "Las Comunidades de Villa y Tierra en Soria" en "Celtiberia" n° 65 (1983), pp. 5-35; PÉREZ FUERTES, P.: "Síntesis histórico-política y socio-económica del señorío y tierra de Molina", Guadalajara, 1983; ASENJO GONZÁLEZ, M.: "Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medioevo", Segovia, 1986; SANTOS CANALEJO, E.: "La historia medieval de Plasencia y su entorno geohistórico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos", Cáceres, 1986; LUIS LÓPEZ, C.: "La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna", Avila, 1987.

²¹ MAYORAL FERNÁNDEZ, J.: "El municipio de Avila (Estudio Histórico)", Avila, 1958, p. 153; MARTÍN CARRAMOLINO, J.: "Historia de Avila, su provincia y Obispado", Madrid, 1872-73, Vol. III, p. 392.

²² DELRYMPLE, 4 de agosto de 1774, en HERNÁNDEZ ALEGRE, B.: "Avila en la Literatura II. (Narrativa-Teatro-Viajes)", Avila, 1984, p. 200.

²³ Ver DEMERSON, G.: "La Sociedad Económica de Amigos del País de Avila (1786-1857)", Avila, 1968.

²⁴ AGS, Dirección General de Rentas, 1ª Remesa, 2058, Instrucción de Campomanes de 10 de Octubre de 1775; AHPA, Ayuntamiento, Actas, 166 y ss.

²⁵ MARTÍN GARCÍA, G.: "Nacimiento...", op. cit., Idem: "La industria textil en Avila durante la etapa final del Antiguo Régimen. La Real Fábrica de algodón", Avila, 1988.

²⁶ Sobre el carácter de dominio público de los "baldíos", ver VASSBERG, D.E.: "La venta de tierras baldías: el comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI", Madrid, 1983, p. 30.

²⁷ La utilización del término "baldíos" no ha sido siempre la adecuada ni se ha correspondido con su significado preciso. Ya en el siglo XIX Borjas y Tarríos, refiriéndose a la provincia de Avila, se quejaba de que la cantidad de tierras comunales y concejiles y de los baldíos era muy difícil de conocer "...porque ni su uso ni su propiedad convienen con su nombre: en todos los pueblos del Estado de Villatoro, de Bonilla y otras partes, el disfrute de las tierras que han llamado comunes y baldíos no es libre a los vecinos ni su producto pertenece a los Propios de los Pueblos, sino a los señores territoriales..." BORJAS Y TARRÍOS, B.: "Estadística territorial de la provincia de Avila...", Madrid, 1804.

que los había adquirido del Rey, "señor supremo, con derechos eminentes sobre los espacios vacantes"³³, en virtud de mercedes y privilegios concedidos y confirmados por ejecutorias otorgadas en diferentes etapas de su historia.

Tradicionalmente los abulenses han venido considerando y aduciendo como primer título de posesión³⁴, documentado históricamente, un privilegio otorgado por Alfonso X el 30 de Octubre de 1256 (era de 1294) en el que concedía a la ciudad y pueblos de la Tierra, a cambio de los servicios prestados a él mismo y a sus antecesores, todos los terrenos baldíos, montes y dehesas para que los disfrutasen con entera libertad e independencia como lo habían hecho desde la época de su asentamiento³⁵.

La concesión sería confirmada posteriormente, y por motivos similares, en mercedes, ejecutorias y otros instrumentos de adquisición otorgados primero por Alfonso XI, después por Enrique III y Juan II y, finalmente, por un privilegio de los Reyes Católicos de fecha 11 de agosto de 1495³⁶. Pero, a pesar de tales títulos de posesión, durante la segunda mitad del siglo XVI, agobiada la Corona por acuciantes problemas económicos y a fin de allegar caudales para la Hacienda del Estado, el rey Felipe II dedicó poner en venta varias villas, lugares y términos realengos, incluyendo entre estos últimos los baldíos de la ciudad y Tierra de Avila. Ante la decisión regia, los pueblos solicitaron preferencia en la compra de los terrenos, basando su petición en la necesidad de pastos para sus ganados y en el derecho que les daban los servicios y privilegios concedidos con anterioridad. Se ajustó el precio de 15.000 ducados y, una vez pagada dicha cantidad, se entregó la escritura correspondiente, firmada en Valladolid por doña Juana, Gobernadora del Reino, el 17 de abril de 1559³⁷ y confirmada por el Rey, su hermano, en Toledo el 18 de enero de 1560³⁸. Posteriormente, en 1586, todavía en el reinado de Felipe II, tuvieron los pueblos que hacer un nuevo desembolso para que se reconociera a la comunidad la posesión permanente de los terrenos³⁹.

El problema se repitió en términos similares en el siglo XVIII. Por los Reales Decretos de 29 de septiembre de 1737 y 8 de octubre de 1738 el Gobierno de Felipe V ordenó el reconocimiento y averiguación de todos los términos realengos, baldíos y despoblados del Reino que se pudieran considerar habían sido usurpados en otro tiempo a la Corona. Para la ciudad de Avila y pueblos de su Tierra y Provincia se nombró Comisionado Regio a D. Andrés Simón Portero, Oidor de la Real Audiencia del Reino de Mallorca, quien, considerando, después de las formalidades e investigaciones oportunas, que los privilegios, mercedes, ejecutorias y demás títulos adquiridos con anterioridad y alegados por la Universidad de la ciudad y Tierra no probaban suficientemente la pertenencia ni el dominio de los citados Baldíos, dictaminó el reintegro de tales terrenos a la posesión de Su Majestad. Los abulenses se opusieron⁴⁰, pero ante la insistencia y las razones del Comisionado y el miedo a perderse en costosos y prolongados litigios "de fines dudosos e

incierto"⁴¹, hubieron de capitular y ofrecieron al Rey la entrega de un servicio de 70.000 reales por parte de ambas comunidades. A cambio de ello, el 24 de abril de 1741 se firmó una escritura pública de "benta, transacción y subrogación de todos los términos comunes, valdíos y realengos que goza esta noble ciudad de Avila y los siete sexmos que componen la Universidad de su Tierra con el derecho Privativo de sus Pastos y aprovechamiento de montes y sovrante de términos que tienen los pueblos de los dichos siete sexmos, otorgada a nombre de Su Majestad y de su Real Hacienda en favor de dichas Comunidades"⁴². Sus cláusulas declaraban expresamente que "la ciudad y los pueblos en común quedaban subrogados en el derecho de la Real Hacienda para aprovechar y disfrutar sin restricción de ninguna especie los terrenos adquiridos..."⁴³. Era el reconocimiento explícito y definitivo de su posesión.

Otra cosa era la utilidad económica de dicha posesión. Constituidos en su mayor parte por serranías, pedregales y terrenos poco aptos para el arado, los baldíos pertenecientes a la Universidad de la Ciudad y Tierra de Avila producían unos cuantos granos, algunas frutas, un poco de carbón de roble o de encina, leñas, maderas de pino y de aliso y pastos, sobre todo pastos, capaces de alimentar al año, especialmente en temporada de "veranadero", a más de cuarenta mil cabezas de ganado⁴⁴. Su aprovechamiento, gratuito y abierto en teoría a todo aquel que tuviera la condición de vecino propietario⁴⁵, provocó con frecuencia la confrontación de intereses entre los vecinos de la ciudad y los vecinos de los pueblos de la Tierra y entre los grandes ganaderos, dueños de cabañas importantes, y los vecinos pobres, que, en caso de tener ganado, apenas podrían reunir un corto número de ovejas o de cabras o algún cerdo para el consumo familiar, que no les permitían beneficiarse con regularidad, como a los poderosos, de las propiedades de la comunidad. Incluso había vecinos para quienes las obligaciones y prestaciones consustanciales a la posesión de los Baldíos constituían en ocasiones cargas económicas difíciles de soportar.

2.2. —Aprovechamiento de los pastos de los Baldíos

Efectivamente, los bienes comunales de origen medieval —y los terrenos baldíos de Avila lo son— no han originado nunca, en palabras del profesor Barrios García, comunismo igualitario, sino propiedad municipal: sólo los vecinos propietarios de la ciudad y de los pueblos de los siete sexmos de la Universidad de la Tierra tenían derecho a disfrutar de la riqueza común⁴⁶. En tales circunstancias, los municipios más poderosos —la ciudad respecto a los concejos rurales— y los grupos dominantes dentro de cada municipio organizaron, siempre en beneficio propio, el aprovechamiento de los bienes comunales. En el caso de la asociación de la ciudad y pueblos de la Tierra de Avila, la institución sirvió, de hecho y desde el principio, para garantizar al grupo guerrero de la ciudad y a unos cuantos campesinos-propietarios la disponibilidad de pastos para su gana-

³³ BARRIOS GARCÍA, A.: "Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1085-1320)", Vol. I, Avila, 1983, p. 197.

³⁴ AHA, Universidad de la ciudad y Tierra, "Escritura de venta y perpetuación de Valdíos...", 1741; AHPA, Ayto. C 122 43/10, Representación de los Procuradores de la Tierra de 14 de marzo de 1849, 133-148.

³⁵ AHPA, Ayto. Privilegio de Alfonso X. Testimonio de 1740; MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad...", op. cit. Apéndice documental X, p. 36.

³⁶ Ibidem.

³⁷ AHA, Universidad... L 3/5.

³⁸ Ibidem; AHPA, Ayto. C 15 L 4/12, 4/16.

³⁹ AHPA, Ayto. C 15 L 4/13, Cédula Real disponiendo se vendan las tierras valdías, publicas y realengas de la ciudad de Avila, San Lorenzo a 16 de agosto 1586.

⁴⁰ AHPA, Ayto., Actas, 129, sesión de 15 de noviembre de 1740, f. 63; AHA, Universidad, L 55/26, Cédula de 16 de diciembre de 1740.

⁴¹ AHA, Escritura de venta...

⁴² Idem.

⁴³ Idem.

⁴⁴ AHPA, Ayto. C 122 43/10. Peritaje de 14 de octubre de 1769, fº 122.

⁴⁵ Una de las razones que mueven a Portero a querer reintegrar los Baldíos de la Ciudad y Tierra de Avila a la Corona es "el derecho prohibitivo de sus pastos en que los tenían solamente los vecinos y habitantes del casco de la ciudad, sus arrabales y de los pueblos que componen los siete sexmos debiendo ser comunes para todos los demas pueblos que estan inmediatos a dichos pastos..." AHA, Escritura de venta..., 98.

⁴⁶ BARRIOS GARCÍA, A.: "Estructuras agrarias..." op. cit., p. 197.

do durante cualquier época del año. Por eso, dicha asociación, y citamos de nuevo al profesor Barrios García, se convirtió a lo largo de su historia en una fórmula más de explotación del campesinado, en "una manifestación de la paulatina yugulación de las poblaciones rurales y de la subordinación de los concejos de aldea a la minoría que controla el aparato de poder de las villas..."⁴⁷. Era la ciudad la que controlaba los concejos rurales y gobernaba las aldeas de la Tierra y, en definitiva, la que administraba los productos de los baldíos y decidía y determinaba su aprovechamiento y su utilización⁴⁸.

Poco influía, en tal sentido, la existencia de *sexmeros* o de *alguaciles entregadores* primero⁴⁹ y de *Procuradores de la Tierra* después⁵⁰, porque tales procuradores, elegidos para defender los derechos de la asociación y representar a los pueblos en la corporación municipal de la ciudad en todos los asuntos relacionados con la colectividad — repartimientos, derramas, deslindes, amojonamientos — o tenían escasas atribuciones y competencias o se veían seriamente limitados a la hora de su ejecución. Y la mejor prueba de ello es que cuantas ejecutorias y cartas expidieron los Reyes en favor de la Universidad o encomendaban su cumplimiento al Corregidor, Justicia o Regimiento de Avila o al Procurador del Común de la ciudad o eran ellos quienes las impetraban⁵¹. El hecho, en cualquier caso, pone de manifiesto el control evidente que ejercía la ciudad sobre la administración de los bienes comunes.

Sin embargo, a partir del siglo XV, los Procuradores generales de la Tierra adquieren progresivamente un carácter nuevo y una nueva dinámica y adoptan posturas más firmes y decididas. En 1460 los vemos tratar con el Concejo de Avila y conseguir una sentencia arbitraria referente a los gastos que la ciudad y Tierra debían hacer en obsequio de los Reyes y la parte que cada una había de costear⁵²; en 1485 participan en la redacción de las nuevas ordenanzas del Concejo de Avila⁵³; en 1540 son nombrados patrones de la alhóndiga juntamente con el produrador de la ciudad y el Cabildo de la cathedral⁵⁴; y en 1546 recaban la preferencia de asiento respecto al fiscal del Concejo en los Ayuntamientos y salidas que hacía éste en las procesiones y funciones públicas⁵⁵. Des-

⁴⁷ Ibidem; En el mismo sentido se expresa C. LUIS LÓPEZ en "La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita..." op. cit. p. 154.

⁴⁸ "...La ciudad repoblada, la ciudad fuerte por sus murallas, fuerte por sus pobladores belicosos y endurecidos en cien batallas, fuerte además por el favor y privilegios que alcanza de los Gefes de la Reconquista y de los Reyes luego, la ciudad debió ir fomentando la población de aldeas y aumento de ellas en su Tierra; y de la ciudad debió descender toda la intervención en el asunto de terrenos, aprovechamientos y el modo y la forma de ellos..." AHPA, Ayto. C 122 43/10, Informe del Ayuntamiento de Avila en 19 de julio de 1849, f° 140.

⁴⁹ Desde los primeros tiempos y para su más fácil gobernación, la Tierra aparece dividida en siete sexmos — San Juan, San Pedro, Santo Tomás, Covalada, Serrezuela, San Vicente y Santiago — al frente de los cuales estaban los *sexmeros*, primero uno y después dos, nombrados por los regidores de los pueblos para intervenir en los repartimientos y derramas ordenados por el Concejo de la ciudad y para los deslindes y amojonamiento de los términos. MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad...", op. cit., p. 37.

⁵⁰ Los acuerdos sobre cuestiones referidas a la Universidad de la ciudad y Tierra se tomaban en Junta General, presidida por el Corregidor de la ciudad y los Procuradores generales de la Tierra e integrada por los representantes de cada uno de los sexmos.

⁵¹ Los Procuradores Generales eran dos. El Procurador General Mayor y el Procurador General acompañado. El Procurador General acompañado era elegido anualmente por votación de los representantes de los sexmos entre una terna de personas, de las cuales dos eran presentadas por el Procurador General Mayor saliente y una por el sexmo que por turno le correspondía en cada Junta. El mandato del Procurador General Mayor normalmente duraba un año, al cabo del cual cesaba y era sustituido por el Procurador General Mayor normal. Libro de acuerdos de la Junta General de la Tierra, 1758-1781.

⁵² MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad..." op. cit., p. 133.

⁵³ Idem, p. 38.

⁵⁴ AHA, Libro 15.

⁵⁵ MOLINERO FERNÁNDEZ, J.: "Asocio de la extinguida Universidad..." op. cit., pp. 20-32.

pués, paulatinamente, fueron asumiendo otras facultades y prerrogativas, muchas de ellas ajenas a su cargo, y se ocuparon, entre otras cuestiones de interés, de las obras públicas, de las cárceles, los caminos, los cuarteles, alojamientos, servicios y donativos y de la conservación de los montes, pastos y baldíos de modo tal que en muchos casos ejercían la autoridad municipal juntamente con los concejos de los pueblos. En uso de sus facultades, dictaban disposiciones, entablaban recursos y, como es lógico, chocaron en muchas ocasiones con los intereses hegemónicos de la ciudad con cuyo ayuntamiento promovieron y sostuvieron desde siempre cuantiosos pleitos y múltiples discordias⁵⁶.

Semejante situación, caracterizada por los enfrentamientos continuados y por un entendimiento difícil e inestable, se prolongaría hasta las primeras décadas del siglo XVIII y desembocaría finalmente en la firma en el año 1716 de una concordia o transacción entre la ciudad de Avila, representada por el Procurador General de su Común, y los Procuradores Generales de la Universidad de la Tierra con la que se pretendía poner fin de forma definitiva a los pleitos, a los litigios y a las reclamaciones. En dicha concordia, aprobada por el Consejo de Castilla en 1719 y desarrollada en veintiocho artículos que recuerdan en buena medida una sentencia arbitral dictada ya en 1640, se acordó que los gastos de la Universidad de la ciudad y Tierra de Avila tales como funerales, rogativas, coronaciones o recibimientos regios; acuartelamiento de tropas; servicios reales o donativos; reparación de caminos, calzadas y puentes; comisiones y dietas; mantenimiento de la cárcel pública, y otros cualesquiera que se produjeran, se habían de dividir en cinco partes, de las cuales cuatro corresponderían a los pueblos de la Tierra y una a la ciudad. En la misma proporción se distribuyeron las producciones y los beneficios. Al mismo tiempo, se establecía que el nombramiento de guardas para la conservación de los montes, pises y pastos debía ser efectuado conjuntamente por el caballero comisario de la ciudad y los procuradores de la Tierra; se prohibía cortar árboles y romper tierras sin las licencias oportunas, y se confirmaba de nuevo el puesto de los Procuradores Generales de la Tierra entre los individuos del Ayuntamiento de la ciudad. Una multa convencional de 3.000 ducados a la parte que faltase a la concordia pretendía garantizar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos pactados⁵⁷.

La concordia de 1719 sirvió, sin duda, para configurar un sistema estable de administración y reparto de las cargas, los servicios y la producción. Y en tal sentido, baste señalar, como ejemplo de su validez, que los 70.000 reales que la Universidad de la ciudad y Tierra hubo de desembolsar en 1741 para lograr el reconocimiento legal de su propiedad sobre los terrenos baldíos, 14.000 reales — la quinta parte del total — corrieron de cuenta de la ciudad⁵⁸ y los 56.000 restantes de cuenta de los pueblos de la Tierra. Y lo mismo sucedió, por lo general, con los repartimientos ordinarios y otros gastos ineludibles⁵⁹. Pero la concordia no era más que un acuerdo de carácter administrativo y no en-

⁵⁶ MAYORAL FERNÁNDEZ, J.: "El municipio de Avila. Estudio histórico", Avila, 1958, p. 83, 98, 137.

⁵⁷ AHPA, Ayto. C13 L1; AHA, L19, 1057. "Escritura de transacción y concordia celebrada entre la ciudad de Avila y los siete sexmos de su Tierra sobre el modo de contribuir a los gastos comunes".

⁵⁸ Una vez obtenido el permiso correspondiente, y después de haberlo intentado infructuosamente con la Obra Pía del Abad D. Juan Dávila, sita en el Real Convento de Santo Tomás, la ciudad otorgó un censo al quitar de 16.000 reales en favor de la Casa y Hospital de San Joaquín, a razón del tres por ciento sobre los bienes propios y rentas de la ciudad para hacer efectivos los 14.000 reales que importó su parte en la transacción y el pago de las costas. AHPA, Ayto. Actas, C 130 f° 15, 21, 28, C 18 L 5/27, Escritura de censo otorgada por la ciudad de Avila a favor del Hospital de Convalecientes de San Joaquín.

⁵⁹ AHPA, Ayto. Actas, año 1720 y ss.

No ocurrió así, sin embargo, con la forma de financiar los gastos que se pensaban realizar para adaptar, de acuerdo con una R.O. de Fernando VI de 3 de septiembre de 1749, el alcázar de la ciudad para cuartel de Caballería e Infantería. Dado que los alojamientos de tropas, según la Concordia de 1719, se habían de satis-

Y si el reparto de cargas y servicios y la distribución del producto de las cortas de madera o de las rentas de algunas tierras se verificó regularmente, el disfrute de los pastos...

La gratitud del aprovechamiento de los pastos, invocada desde antiguo como justificante y apremio de posesión, había desembocado, pues, en una clara usurpación de los bienes comunes por parte de los poderosos en una práctica inveterada que con el paso del tiempo se tendía a legitimar. E incluso se daba la paradoja de que quienes más y mejor aprovechaban los pastos comunes eran vecinos mañeros —el Conde de la Roca, 12.000 cabezas de ganado, residente en Valencia; el Marqués de los Llanos, 9.000 cabezas, residente en Madrid...⁶⁰— que no tenían sus casas abiertas en Avila y que, por consiguiente, no sólo no contribuían a los gastos comunes de la Universidad y Tierra porque no eran auténticos vecinos de ella, sino que además, por no tener aquí su residencia, apenas podía repercutir favorablemente en la ciudad alguna de sus ganancias o el sobran te de los beneficios obtenidos de sus ganados.

Sucedió así hasta 1768, año en que los Príncipes de Asturias, herederos de las facultades y a propuesta de los Príncipes de Castilla, por

argumentaban que la ciudad sería la única que se beneficiaría de la construcción del cuartel y se libraría del sacrificio de tales alojamientos y, por consiguiente, consideraban injusto que la Tierra hubiera de contribuir con las cuatro quintas partes de la financiación. Como resultado de sus quejas, por R.O. de 11 de enero de 1768, se firmó una nueva concordia sobre este punto particular por la que se acordaba que el gasto del cuartel se satisficiera por mitades entre la ciudad y los pueblos de la Tierra. AHPA, Ayto. C 21 7/24.

⁶⁰ AHN, Consejos, 2143 C 1, fº 168.

⁶¹ AHA, "Libro de acuerdos de la Junta General de la Tierra", 1768, fº 10.

22 General de la Tierra...", Junta de 9 de mayo de 1766, f° 82.

2.3.1.—Imposición del arbitrio

Se quejaba el Procurador General Mayor de la Universidad de la Ciudad y Tierra, en representación dirigida al Rey en junio de 1768, de que "...debiendo ser común y a beneficio de todos el aprovechamiento de los baldíos" se hallaba éste "vinculado en so los los poderosos, de suerte que a el paso que estos florecen con el aumento de sus riquezas y vienes se destruyen y aniquilan los demás por el peso de las contribuciones y otras cargas que le son indispensables..."⁶². La denuncia, promovida desde la Junta de la Tierra⁶³ y reprimida con anterioridad por la influencia de los ganaderos y los intereses particulares o la connivencia de algunos procuradores, venía ahora motivada por la presión creciente de la fiscalidad⁶⁴, los problemas de crecimiento de los pueblos constreñidos a los reducidos límites de sus términos municipales⁶⁵ y la situación económica de la propia Universidad de la Tierra que se endeudaba año tras año con su depositario. Las cuentas de ingresos y gastos de dicha Universidad, referidos a la década de 1760, son, en este sentido, bastante concluyentes tal y como ponen de manifiesto las cifras que exponemos a continuación.

Ingresos	Gastos	Saldo
35.000 r.	90.346 r.	—55.346
35.859	122.775	—86.916
79.375	127.831	—48.456
35.623	131.746	—96.123
51.274	139.918	—88.644
62.155	142.527	—80.372
59.832	118.572	—58.740
43.620	125.195	—81.575
45.456	137.163	—91.707

⁶² AHA, L 40/23. "Imposición del arbitrio de pastos para pastos de la Tierra y evitar el repartimiento de martinega", Representación de 28 de junio de 1768.

⁶³ AHA, Libro de acuerdos de la Junta de la Tierra, f° 82.

63 AHA, Libro de acuerdos de la Junta de la Tierra, 1862.

64 AHA, L. 40/33. Expediente para que satisfagan los repartimientos que les corresponden por Real Cédula de 21 de mayo de 1723 "los despoblados del valle dicho de La Pabona, los de Ventosa de la Cuesta, Rivilla de la Cañada, Villagarúa, Bermudillo, Mingoblanco, Zurraquín y la Gasca que lo han dexado de hacer de algunos años". Representación de 11 de octubre de 1763.

⁶⁵ Debían influir también, en tal sentido, la instrucción despachada en 1758 sobre la conservación de montes y plantíos que prohibía la entrada en ellos de todo género de ganados y que privó de pastos a vecinos de los pueblos que posiblemente volvieron los ojos hacia los pastizales de los Baldíos. AGS, SRIA, HDA., 583 Intendente de Avila a Múzquiz, 5 de agosto de 1766.

⁶⁶ AHA. "El libro de cuentas de la Universidad de la Tierra tomadas al depositario general, D. Josef de la Taxada".

67 *Idem.*

nos. Las partidas de gastos —gastos ordinarios de misas, mozos de coro o ánimas; salarios de guardas, procuradores y porteros; veredas; obras en la cárcel; obras en el alcázar; gratificaciones...—, se incrementaban año tras año por acumulación del alcance que resultaba en cada ejercicio a favor del depositario. El saldo negativo era de tal consideración que sólo podía ser compensado cada cierto tiempo por la suma de los sobrantes que se producían continuamente en la recaudación fiscal de las tercias reales de los pueblos⁸⁸.

Parece evidente, pues, que la Universidad de la Ciudad y Tierra de Avila, a pesar de ser dueña legal de extensos y, en algunos casos, ricos pastizales, se había convertido con el paso del tiempo en una pesada carga para la mayor parte de los pueblos que la no se beneficiaran directamente del aprovechamiento de los pastos, porque sus vecinos que se veían sometidos a los inexcusables repartimientos de gastos ordinarios y extraordinarios a que estaba obligada la asociación y al peligro que significaba su continuado y progresivo endeudamiento.

Por tal motivo, en la ya citada representación de junio de 1768, los Procuradores Generales de la Tierra solicitaban al Rey, a través del Consejo de Castilla, se sirviese concederles facultad para adhestrar los pastos comunales de la Asociación y exigir a los ganaderos el pago de una cantidad determinada de dinero, a modo de arbitrio o arancel, por cada cabeza de ganado de cualquier especie que introdujeran, a partir de entonces en "el Valle de Iruelas, el Quintanar, Sierra de Avila, la Mata y otros sitios conocidos con el nombre de Valdíos"⁶⁹. Pretendían que su producto entrara íntegramente en poder del Depositario General de los efectos de la Universidad de la Tierra en cuenta formal todos los años y que lo que quedase líquido, una vez deducidos los gastos indispensables y el dos por ciento que prevenía la Real Instrucción para la Administración de Propios de 30 de julio de 1760, se aplicase para "la defensa en pleitos de sus derechos y regalías, pago de situados de alcalde mayor, abogados, agentes, sexmeros y procuradores generales de la Tierra" y otros gastos ineludibles y extraordinarios, para cuya satisfacción se habían hecho necesarios hasta aquellos momentos los repartimientos de martiniega⁷⁰. La petición, repetida en una segunda representación de carácter similar⁷¹, Su Majestad⁷². Era intención del Corregidor⁷³...

La petición, repetida en una segunda representación de carácter similar⁷¹ y contando con el informe favorable del Corregidor,⁷² mereció en mayo de 1769 la aprobación de Su Majestad⁷³. Era intención del Consejo, según se desprende de su respuesta, compaginar, lo mejor posible, los derechos de todos y cada uno de los vecinos comuneros con los intereses —siempre importantes para la economía y la producción de lana de la provincia— de los ganaderos que habían venido disfrutando tradicionalmente y de forma gratuita de los pastos de los Baldíos. En consecuencia, y por sugerencia del propio Corregidor⁷⁴, el Consejo de Castilla decidió que "...tanto estos ganaderos como todos los demás vecinos de dicha ciudad y Tierra que quisieran llevar sus ganados a dichos terminos en invierno o verano satisficiesen para cada cabeza una tercera parte de la cantidad que tubiere de costo en dehesas particulares..."⁷⁵. Dicha tercera parte se concretaba en el

En el año 1771 los ingresos ascienden a 143.422 reales, de los cuales 70.000 correspondían al alcance por tercias encontra del Depositario. Idem.

AHA, L 40/23 "Imposición del arbitrio..." Representación de junio de 1768.

Ibidem.

AHA, L 40/23, "Imposición del arbitrio..." Representación de junio de 1768.

Ibidem.

71 AHA, L 40/23, "Imposición del arbitrio...". Representación de junio de 1768.
72 Idem. Informe...

72 Idem. Informe del Corregidor de 15 de marzo de 1769.
73 Idem. Carta-Orden de 29 de mayo de 1769.
74 Idem. Informe del Corregidor de 4 de mayo de 1769.
75 Idem. Informe del Corregidor de 15 de marzo de 1769.

74 Idem. Carta-Orden de 29 de mayo de 1769.
75 Idem. Informe del Corregidor de 15 de marzo de 1769.

Idem. Carta Orden de 29 de mayo de 1769.

pago tanto durante el *invernadero* como durante el *veranadero* por un real por cada cabeza de ganado lanar, cuatro reales por cada res vacuna, cinco por cada caballería, real y medio por cada cabra y un real por cabeza de ganado de cerda⁷⁶.

Para su aplicación, D. Josef González, por aquel entonces Comisario Ordenador de los Reales Ejércitos, Intendente y Corregidor de Avila y su provincia, dictó una serie de normas de obligado cumplimiento con el fin de asegurar en todo instante el pago de las cantidades correspondientes, impedir abusos, garantizar los derechos de los ganaderos, concretar las condiciones y los costes del ganado introducido fuera de temporada y establecer las pautas de la contabilidad⁷⁷. Era todo un intento de prevenir posibles fraudes y evitar todo tipo de perjuicios a la comunidad. E, inmediatamente, en ese mismo verano, el arbitrio sobre los pastos de los Baldíos se puso en ejecución.

2.3.2.—Administración del producto de pastos

Como es lógico, los ganaderos más interesados en el aprovechamiento gratuito de los pastizales protestaron reiteradamente y elevaron una y otra vez sus quejas y representaciones al Consejo de Castilla. Por el Consejo, después de los informes pertinentes, se confirmó en su decisión y ordenó, por Auto de 21 de agosto de 1770, se observaran y cumplieran, en todo y por todo, los acuerdos aprobados en la Real Provisión de 29 de mayo de 1769, por la que se establecía el arbitrio, en atención a que "...los pastos son comunes y en ellos tienen igual interés todos los vecinos de la ciudad y siete sexmos de su Tierra para el fomento de unos y otros y que puedan mantener sus ganados sin que los de mayor número los aprovechen en exceso en perjuicio de los otros..."⁷⁸. Era la confirmación definitiva e irrecusable de la imposición del arbitrio sobre los pastos.

Su administración se puso inicialmente a cargo de la Junta de la Tierra⁷⁸, de acuerdo con la Concordia de 1710, por el Procurador General Mayor de los siete sexmos de ella y por un regidor comisionado y nombrado cada año por el Ayuntamiento de la ciudad. Pero, el carácter equívoco que la imposición del arbitrio introdujo en la consideración de los Baldíos, adehesados como si de bienes de Propios se tratara, había de repercutir necesariamente en su propia organización administrativa. Quizás por ello, D. Agustín Vélez Vela, regidor perpetuo y miembro de la Junta que administraba los bienes propios de la ciudad, acudió al Consejo para suplicar que fuera dicha Junta, y no la Tierra, la que se ocupara del gobierno del arbitrio y del reparto de pastos y ganados. Y, aunque, a instancias del propio concejo de Avila —Corregidor, regidores, diputados de abastos— y de los Procuradores Generales de la Tierra⁷⁹, el Consejo denegó su petición y la administración de los pastos continuó de cuenta de la Junta de la Tierra⁸⁰, ésta se vio obligada, a pesar de tener su propio contador, a sujetar su contabilidad formal a la contaduría de la ciudad y de la Junta de Propios, que estaba regentada por el escribano del Ayuntamiento.

A pesar de todo, la gestión de la Junta dejó bastante que desear y, durante algún tiempo, la medida impositiva no fue, en muchos aspectos, nada más que un artificio ine-

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ Idem. Providencia de 12 de junio de 1769.

78 *Idem.* Providencia de 12 de junio de 1763. *Asuntamiento. Actas*, 183.

79 "... deseando administrar los útiles aprovechamientos de los terrenos comunales de la ciudad y Tierra con to-
79 da integridad y pureza de forma que legítimamente percibiese la quinta parte de ellos aquella ciudad y quatro
ciudad de diciembre de 1770.

80 AHA, L 40/11, Resolución de 9 de febrero de 1771.

ficaz. El Administrador de la Tierra, D. Josef de la Taxada, conocedor de los asuntos contables y encargado de afianzar los contratos de los ganaderos y de llevar separadamente cuenta y razón de cada uno de ellos⁸¹, era, en realidad, quien disponía y manejaba todo, comprometiendo y, a veces, inculcando a los Procuradores de la Tierra y al Comisario nombrado por la ciudad en el ejercicio de su función. D. Miguel Fernández de Zafra, corregidor de la ciudad desde 1776, llegó a acusarle de connivencia con algunos ganaderos, de malversación de fondos y de cometer tales excesos, que "...tratándose de la división, que ha visto y aprobado el Consejo, hubo sitio en que se hallaron disfrutando los pastos más de trece mil cabezas de ganado que sólo pagaban en él por tres mil"⁸².

Sin embargo, y a pesar de la existencia cierta de éstas y otras manipulaciones fraudulentas, los resultados económicos, en una estimación global, podían considerarse satisfactorios: El arbitrio producía, aproximadamente, 30.000 reales anuales⁸³ que permitieron alcanzar el objetivo inicial de su imposición y redimir, en buena medida, los repartimientos pecuniarios a que estaban obligados los pueblos de la Tierra⁸⁴. Pero el destino de los caudales sobrantes y, después también, el destino de la cuantía total de dicho arbitrio, estuvo sometido a las consecuencias del equívoco, ya comentado, que se produjo al considerar los pastos de los Baldíos como si fueran bienes de Propios en cuanto a su aprovechamiento y explotación.

En efecto, las disposiciones iniciales —Provisiones del Consejo de 29 de mayo de 1769 y 21 de agosto de 1770—, pretendiendo salvaguardar de alguna forma el carácter comunal de los pastizales, recomendaban a la Junta aplicar el sobrante del arbitrio en la adquisición de ganados para los vecinos de la ciudad y Tierra que no los poseyeran, con la intención de garantizar a todos la posibilidad de disfrutar, directamente, de unos bienes que a todos pertenecían. Pero, obviamente, las recomendaciones del Consejo no se pudieron llevar a efectos. Primero, por la dificultad que entrañaba ejecutar tal medida con justicia y equidad y, segundo, porque, aunque se hubiera hecho el reparto con todo cuidado y rigor, sería muy corto —por la escasez de dinero— el número de vecinos a quienes podía aprovechar tal beneficio. De hecho, en el Reglamento formado en 23 de marzo de 1774 para regular la contabilidad de ingresos y gastos de la Tierra se pasa por alto aquella posibilidad y se dispone que el sobrante de caudales se había de depositar en el futuro "en un arca de tres llaves, que la una tendrá el Presidente de la Junta, otra el Depositario y la otra el escribano del Ayuntamiento, para atender a lo que sea más útil y beneficioso del Común de la Tierra, representándolo antes al Consejo por medio del Intendente..."⁸⁵.

Poco tiempo después, el Corregidor y algunos regidores abulenses manifestaban públicamente la opinión de que "lo más útil y beneficioso para el Común de la Tierra" era invertir el producto de sus pastos en el fomento y desarrollo de la fábrica de paños que se había establecido en Avila en 1775 con dinero sobrante de los Propios de la ciudad. Argumentaban, en apoyo de sus tesis, que la inversión serviría para proporcionar trabajo y jornal a un elevado número de vecinos necesitados⁸⁶. Y el Consejo, tras considerar las representaciones recibidas y valorar sus planteamientos, mandó, por carta-orden de 20 de marzo de 1777, aplicar los caudales del producto de pastos a la financiación de la manufactura textil. En consonancia, con esta disposición y en virtud de la misma carta-or-

den, la administración del arbitrio impuesto sobre los baldíos, que había estado hasta entonces a cargo de la Junta de la Tierra y de su depositario, pasaba a depender directamente de la Junta de Fábricas y del Tesorero de la misma, que se encargarían en adelante de su gobierno, contabilidad, recaudación y distribución.

2.3.3.— Aplicación del arbitrio sobre los Baldíos a la financiación de la Fábrica de paños

2.3.3.1.— La Fábrica de paños del Común de la ciudad

En la década de 1760 la ciudad de Avila vivía una situación económica y social bastante paradójica: mientras muchos vecinos estaban sin trabajo gran parte del año por falta de ocupación estable y otros muchos se hallaban reducidos a la miseria, a la limosna y a la mendicidad⁸⁷, el Ayuntamiento atesoraba en sus arcas más de 400.000 reales procedentes de los sobrantes acumulados del encabezamiento de rentas que se había formado en 1750 entre la Real Hacienda y la ciudad⁸⁸.

El propio Ayuntamiento, preocupado por el problema y contando con el apoyo y la recomendación del Consejo de Castilla, llegó a la conclusión, después de varias sesiones de su Junta de Propios, que el medio idóneo de remediar la precaria situación de tantas familias abulenses y dar, a la vez, una aplicación útil y adecuada a sus caudales, era intentar restablecer las antiguas fábricas de paños, arruinadas desde tiempo atrás, para fomentar el trabajo y proporcionar salario digno a las personas que se pudieran emplear.

En respuesta a su iniciativa, en noviembre de 1771 acudieron los señores Francisco Tapia, Manuel Medina y Juan Casaña a proponer al Concejo de Avila establecer en compañía⁸⁹ doce telares de estameñas, barraganas, sempitarenas y otros tejidos, y cuatro telares de paños. Pedían un préstamo de 60.000 reales de los fondos de Propios y Arbitrios, sin intereses, a pagar en diez años, para hacer los acopios de lanas y preparar todo lo concerniente a dicho establecimiento⁹⁰.

El Ayuntamiento aprobó la propuesta y las condiciones de los fabricantes y las apoyó en todo ante el Concejo⁹¹, pero la respuesta de éste se demoró hasta el año 1774. En dicho año, por Auto de 14 de Octubre y Real Cédula posterior, de 24 de noviembre, el Consejo aprueba el proyecto global y la mayor parte de las condiciones de Tapia, Medina y Casaña, pero deniega la entrega del préstamo de 60.000 reales que pedían los proponentes para formar su sociedad. Como alternativa, mandaba a la ciudad establecer una Junta para el gobierno económico de las fábricas, adquirir telares con su dinero y formar un pósito de lanas para surtirlos, con el fin de proporcionar a todo fabricante que

⁸⁷ Ver MARTÍN GARCÍA, G.: "Nacimiento de una industria..." op. cit., p.

⁸⁸ AHPA, Ayto., Actas, 179. 8 de Agosto de 1750.

⁸⁹ "... el método más proporcionado y seguro —decían los proponentes— es el establecimiento de un comercio formado por compañía, en que por no ser tan fácil la mala dirección y versación de caudales, se asegure no sólo su perpetuidad, sino también las más principales ventajas ya conocidas utilidades, a cuyo fondo podrán contribuir en los sucesivos muchos caudales muertos de que usan personas de todos los estados, porque en este método de comercio podrán girar sus depósitos las Comunidades de ambos sexos, y aun las destinadas a sufragios que no se han impuesto..." LARRUGA Y BONETA, A.: op. cit., XXX, p. 72.

⁹⁰ AGS, Dirección General de Rentas (D.G.R.), la Remesa 2048. Copia en el informe de Campomanes y Valiente de 10 de octubre de 1775.

⁹¹ Por Real Decreto firmado por Carlos III en 1760, los propios y arbitrios de todos los pueblos debían correr bajo la dirección del Consejo de Castilla para que "... los dirija y gobierne y administre y tome las cuentas de ellos anualmente para que constando su legítimo producto se vea igualmente que la inversión ha sido en los fines de su destino, sin extraviarlos a otros que no le son correspondientes..." MANGAS NAVAS: " op. cit., p. 189.

⁸¹ AHA, L 40/5, Reglamento de 22 de marzo de 1774.

⁸² AHN, Consejos, 2143. Representación de Zafra al Consejo en 13 de diciembre de 1777.

⁸³ AHN, Consejos, 2143, c. 2.

⁸⁴ AHA, L 21/17, Representación de 29 de junio de 1790.

⁸⁵ AHA, L 40/5, Reglamento de 22 de marzo de 1774.

⁸⁶ AHN, Consejos, 2143, Representación de 13 de diciembre de 1777.

lo solicitara los pertrechos que necesitase para la manufacturación, con la única obligación de reintegrar su importe del valor de las piezas de paños que vendieran⁹².

La medida no satisfizo ni a Tapia ni a sus compañeros, que renunciaron al proyecto inicial⁹³, pero el Consejo, decidido a llevar a efecto el modelo diseñado, envió a Avila, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda, a D. Patricio Boulger, fabricante irlandés que ya había dado muestras en Brihuega y Guadalajara de sus conocimientos y habilidad, para reconocer la situación y estudiar las posibilidades de la manufactura. Y como consecuencia de la visita, el propio Boulger, consciente de las circunstancias y seguro de su saber, se ofrece al Consejo para establecer ocho telares y dirigir las fábricas de lana que establecieran en la ciudad⁹⁴. Entre sus condiciones figuraba la solicitud de que y director hidráulico del Reino, viniera a Avila para establecer un batán a la inglesa y consiguientemente, garantizar la bondad de su construcción.

El Consejo aprobó la propuesta de Boulger⁹⁵, le nombró director del establecimiento, se constituyó la Junta de Fábricas, se formó el pósito de lanas e inmediatamente, de acuerdo con las instrucciones de Campomanes, comenzó el funcionamiento de la manufactura. En 1777 había ya varias piezas de paños concluidas en los telares y, siendo obligado rematarlas para su comercialización, se hizo necesario poner en funcionamiento la prensa y las máquinas del batán. Pero, al estar arruinado por falta de uso el antiguo batán de las fábricas de la ciudad y considerarse muy costosa su reparación y difícil su acondicionamiento, se estimó más útil y conveniente construir un edificio de nueva planta para servir mejor a las necesidades de las nuevas fábricas de paños.

2.3.3.2. — El arbitrio sobre los Baldíos y el batán de San Vicente

Parecía que el lugar más apropiado para su construcción, por su localización y las características del río, era un terreno situado a medio cuarto de legua de la ciudad, aguas abajo, en la ribera del Adaja, en el que el Común de la Iglesia de San Vicente tenía un molino harinero de tres ruedas y un batán inutilizado y semiderruido. En vista de ello, la Junta de Fábricas propuso al Cabildo de dicha Iglesia que hiciera, por su cuenta, la obra de reconstrucción del batán para arrendarlo posteriormente a la ciudad o, en caso contrario, que consintiera en la venta del terreno y del molino y sus dependencias para que fuera la propia ciudad quien lo construyera⁹⁶.

Decidida la venta y enajenación de todo, con la oportuna licencia del ordinario eclesiástico, los peritos nombrados al efecto tasaron su valor en 117.500 reales de vellón⁹⁷. La operación se consideraba sumamente ventajosa para la ciudad porque se agregaba a sus bienes de Propios y Fábricas la propiedad del molino harinero, con cuyo producto y el que rindiera el batán que se construyera, se pensaba podría redimirse en pocos años

el precio de la compra. El problema era la falta de dinero con que hacer frente a tan importante desembolso: los "sobrantes", acumulados tiempo atrás en el Ayuntamiento, se habían invertido en la compra de lanas, en la construcción de telares, alquiler de casas para talleres y pago de salarios y jornales — más de 700.000 reales en total⁹⁸ — y el encabezamiento de la ciudad, que había proporcionado los mencionados sobrantes, cesaba en diciembre de 1777, por comenzar el año siguiente la administración por cuenta de la Real Hacienda y la recaudación directa de las rentas⁹⁹.

La Junta de Fábricas propuso varios medios para satisfacer el coste del molino y de las obras y máquinas del batán, y, entre ellos, como más útil y provechoso, la aplicación a tal objeto del "...caudal que hubiese existente de los producido del expresado arbitrio de los Valdíos... y el producto que rindiere en lo subcesivo..."¹⁰⁰. Sostenía que tal aplicación sería el único modo de que la inversión de dicho arbitrio sirviera para crear riqueza y favorecer a la mayor parte de los vecinos necesitados de la ciudad y de los pueblos de la Tierra. Y el Consejo, a pesar de la oposición lógica de los Procuradores de la Universidad de la Tierra¹⁰¹, aprobó su petición¹⁰².

En consecuencia, la Junta tomó los 103.000 reales de vellón acumulados a partir de 1770 del sobrante anual del arbitrio impuesto sobre los pastos de los baldíos, que se hallaban depositados en el archivo de la Tierra, y los empleó para pagar el importe del molino y del batán a la Iglesia de San Vicente¹⁰³. Se firmaron las escrituras, el molino pasó a ser propiedad de la ciudad y Tierra y Juan Dowling comenzó a construir las máquinas del batán¹⁰⁴. Pero, obviamente, se hacían necesarios más caudales, tanto para pagar los gastos de las obras y máquinas — más de 200.000 reales¹⁰⁵ — como para la adquisición de materias primas y pago de jornales, y el Consejo de Castilla, sabedor de la ya precaria situación de los Propios de la ciudad y de las dificultades de una posible autofinanciación de la manufactura, ordenó invertir el producto del arbitrio en las fábricas de paños — cuatro quintas partes para la manufacturación, una quinta parte para hacer frente a los gastos ordinarios de la Tierra y entregar la dirección y el gobierno de dicho arbitrio a la Junta económica de fábricas, privando de su administración y control a la Junta de la Tierra, que la había ejercido con anterioridad.

2.3.3.3. — La Junta de Fábricas, administradora del arbitrio de los Baldíos

La Junta de Fábricas existía en Avila desde el 1 de octubre de 1775 y se encargaba, de acuerdo con las resoluciones del Consejo, de gobernar y administrar todos los asuntos económicos de la recientemente creada fábrica de paños.

En los momentos iniciales estuvo integrada por el corregidor de la ciudad, que era

⁹² AHA, L 21/14. Representación de 20 de junio de 1778.

⁹³ AHPA, Ayto., Actas, 165. Múzquiz a la ciudad, 29 de octubre de 1777.

¹⁰⁰ AHPA, Ayto., C 33 4/62.

¹⁰¹ AHPA, Ayto., Actas, 165, 5 de abril de 1777.

¹⁰² AHA, L 21/14. Representación de 20 de marzo de 1777.

¹⁰³ Carta de pago y finiquito de 6 de mayo de 1777. AHPA, Ayto., C 33 4/62.

Lo que faltaba por pagar se tomó del dinero perteneciente a los Propios de la ciudad por vía de préstamo con calidad de reintegro del mencionado arbitrio según se fuera produciendo. AHPA, Ayto. Actas, 165. Resolución de 5 de abril de 1777.

¹⁰⁴ Las máquinas fueron concluidas en 1778. "... son muy buenas —decía Larruga— y completas de todos los utensilios, con el repuesto de nueve telares de ancho y once de angosto sin uso, y que el batán tiene corrientes tres pifias o pares de mazos con una máquina de frisar y otra de perchar a la inglesa..." LARRUGA Y BONETA, A.: " " op. cit., XX, p. 107.

¹⁰⁵ AHPA, Ayto., C 33 4/62. Orden de 23 de marzo de 1777.

su presidente, y dos regidores, D. Manuel Verdugo y Guillamas y D. Joaquín Manuel Agüero, éste último teniente alférez mayor como representante y mayordomo que era del Duque de Medinaceli, Marqués de las Navas. Pero pronto sufrió cambios sustanciales en su composición. Murió D. Manuel Verdugo, regidor perpetuo, y el Consejo nombró para sustituirle a D. Fernando Jimeno y a D. Bernardo Jiménez, ambos regidores trienales, elegidos por la ciudad. Poco después era separado de la Junta D. Joaquín Manuel Agüero, con quien se había enfrentado violentamente el Corregidor por negarse a permitir que se emplearan ciertos fondos de Propios en la manufactura y sustituido por D. Julián Sáez Carrasco, otro de los regidores trienales del Ayuntamiento.

La Junta de Fábricas quedó, pues, al poco tiempo de su fundación, en manos de los regidores trienales, representantes, posiblemente, del elemento más dinámico de la ciudad y enfrentados en sus intereses con la vieja oligarquía de ganaderos y terratenientes: Fernando Jimeno era administrador de la Capilla de San Segundo y llevaba en arriendo la dehesa de Berdeja, propiedad de las religiosas bernardas de Avila, la dehesa de Hernán Gallego del Marqués de La Coruña y la dehesa de Tabladillo, del Marqués de Sofraga, además de labrar algunas heredades de su propiedad¹⁰⁵; Bernardo Jiménez vivía de su tienda de confitería y cerería; y a Julián Sáez Carrasco "no se le conocía más rentan ocupación que su procaduría de causas..."¹⁰⁶.

Ellos, apoyados siempre por el Corregidor Fernández de Zafra, ordenaron la inversión de caudales, tomaron las decisiones que sugería Patricio Boulger, nombraron cargos directivos —guardalmacén, tesorero, factor de lanas— y, cuando lo creyeron necesario, solicitaron y obtuvieron del Consejo la aplicación del producto de pastos a la fábrica de paños. Y no sólo, como hemos visto con anterioridad, la aplicación de los caudales, sino también, y a costa de la Junta de la Tierra, la administración, la recaudación y gobierno directo del arbitrio impuesto sobre los Baldíos.

En este sentido, sus primeras providencias estuvieron dirigidas a intentar en lo posible un incremento notable del producto de los pastos y a racionalizar su explotación. A tal efecto, Fernando Jimeno elaboró un reglamento de uso, desarrollado en veintiocho artículos, que, una vez presentado en el Ayuntamiento, mereció la aprobación de todos los regidores a excepción de D. Francisco del Llano, ganadero, que protestó, pidió tiempo para responder y explicó su postura aduciendo que había agravios y perjuicios a los bienes de la comunidad¹⁰⁷. En dicho reglamento Jimeno dividía los Baldíos en *cuarteles*, "cada uno con sus majadas y abrevaderos", "para el más fácil acomodo de los ganados y repartimiento de los pastos", división que, obviamente, preocupaba y perjudicaba a los grandes ganaderos, acostumbrados aún a aprovechar ellos solos con sus rebaños todos o los mejores pastizales. En consecuencia, el Baldío de la Sierra, el más extenso y de mayor capacidad, quedaba dividido en doce cuarteles —Maja del Pino, Artuñero, Prao La Casa, Maja el Prado, Las Meneas, La Canaleja, El Cancho, Prao María, Peña Negrilla, de cabezas de ganado que, según su cabida, se pensaba podía alimentar durante cada temporada. Y el mismo cálculo se hacía para los baldíos más pequeños, no necesitados de división, de Valle Iruelas, Valdiguélo, La Mata y el Villar.

En total se fijaba para todos los baldíos, tanto en la temporada de verano como en la de invierno, una capacidad de 27.000 cabezas de ganado lanar, 7.200 de cabrío, 2.400

¹⁰⁵ AHPA, Ayto., C 122 43/10, Representación de Fernando Jimeno y Julián Sáez Carrasco de 23 de noviembre de 1778.
¹⁰⁶ AHPA, Ayto., Actas, 168.
¹⁰⁷ AHN, Consejos, 2142. Representación de Zafra de 13 de diciembre de 1777.

de vacuno, 665 yeguas y 550 cabezas de ganado de cerca¹⁰⁸. Su aprovechamiento se otorgaba a los ganaderos que lo solicitaran en los repartimientos, que en su presencia o en la de sus representantes, se celebraban en Avila en fechas anteriores al comienzo de cada una de las temporadas¹⁰⁹. Si los pastos solicitados no eran suficientes para completar su capacidad total de los baldíos, los sobrantes se subastaban entre los vecinos mañeros, que fueron privados definitivamente de su condición de privilegio¹¹⁰ y entre otros ganaderos que no eran vecinos de la ciudad ni de los pueblos de la Tierra.

Evidentemente, no era fácil llevar a cabo una reforma tan importante en la forma de aprovechar los pastos comunales, por la oposición que tales medidas habían suscitado entre los ganaderos influyentes. Quizás, por ello, la Junta de Fábricas sugirió al Consejo que "para mejorar en lo posible dichas reglas, o aclarar o resolver cualquiera duda que ocurriese en razón de los mismos repartimientos era indispensable que hubiese una persona de celo patriótico, tesón y de inteligencia en el asunto de los pastos que estubiese a la frente de todo para cualquiera ocurrencia..."¹¹¹. Y, como es lógico, propuso para el cargo a D. Fernando Jimeno "así por el mérito que tenía acreditado en beneficio del público con motivo del establecimiento de dichas fabricas y su fomento conforme a las instancias del Consejo, como por su singular inteligencia en el referido asunto de los pastos, haber sido el Interventor de las citadas reglas, el que hizo la división de los terminos Valdíos en los doce cuarteles en que oy se hallan y quien ha resistido y hecho frente a los ganaderos poderosos..."¹¹².

Jimeno, a la sazón, se encontraba en Madrid, oficialmente para tratar asuntos de interés referidos a la evolución de la fábrica de paños y el Consejo se mostró sumamente generoso con él. Por orden de 20 de junio de 1778, mandó perpetuar durante veinte años la aplicación del arbitrio de pastos a la fábrica de paños, con la única condición de entregar anualmente la quinta parte del producto líquido de dicho arbitrio a la Junta de la Tierra para hacer frente a los gastos ordinarios de sus pueblos, pasando, en contrapartida, la manufactura y sus pertenencias a ser consideradas en adelante como propiedad absoluta de la Universidad de la ciudad y Tierra de Avila, por ser dicha institución quien iba a financiarlas en realidad¹¹³. En cuanto al propio Jimeno, el Consejo le confirmaba su cargo de diputado de la Junta Económica de Fábricas, le nombraba Comisionado Interventor del arbitrio de pastos de los baldíos, su administrador y gobernador, y le perpetuaba en el cargo de regidor de la ciudad durante los veinte años que habría de durar la aplicación del arbitrio con la antigüedad, voz y voto que le correspondiese, pese a que se cumpliesen los tres años para los que había sido elegido regidor. Como gratificación, se le asignaba en atención a "su celo, eficacia y desinterés" una pensión o "ayuda de costa" de 3.000 reales anuales a cobrar del fondo del arbitrio¹¹⁴.

Fernando Jimeno, perpetuado su mandato como regidor, miembro de la Junta de Fábricas e Interventor del arbitrio de los baldíos, se convirtió, pues, siempre apoyado por Zafra¹¹⁵, en uno de los hombres más poderosos e influyentes de la ciudad. Como admi-

¹⁰⁸ AHA, Reunión de la Junta de Fábricas de 20 de abril de 1777; AHPA, Ayto., C 21 47/6.
¹⁰⁹ Idem, Copia de las actas de la Junta de Fábricas de 16 de marzo y 19 y 20 de abril de 1778.

¹¹⁰ Idem; AHPA, Ayto. Actas, 183. Resolución de 27 de mayo de 1778.

¹¹¹ AHA, L 21/14. Copia en resolución de 20 de junio de 1778.

¹¹² Ibidem.

¹¹³ Por tal motivo se ordenaba igualmente que si hubiera caudales sobrantes o si había ganancias, tales caudales se habrían de emplear para reintegrar las crecidas cantidades de dinero que de sus propios se había invertido en la fábrica con anterioridad. AHA, L 21/14, Resolución de 20 de junio de 1778.

¹¹⁴ Ibidem; AHPA, Ayto. Actas, 183.

¹¹⁵ "...Es un hombre de notoria integridad —decía Zafra de Jimeno— de notoria justificación y rectitud, el más

Para poder cubrir y asegurar el pago de los reintegros había sólo dos opciones: o descontar las cantidades necesarias de los caudales de pastos que se invertían ordinariamente en la fábrica de paños o arbitrar nuevas medidas para recaudar otras cantidades. El Consejo optó por la segunda posibilidad y, previsiblemente, por orden del 26 de febrero de 1780, resolvió aumentar el arbitrio que pagaban los vecinos de la ciudad y pueblos de la Tierra por pastar los prados de los Baldíos en la cuantía de medio real por cabeza de ganado lanar, dos reales en el vacuno, dos reales y medio en el caballar, doce maravedís en el cabrio y un real por cada cabeza de ganado de cerda¹²⁶. Era la imposición del llamado *sobrearbitrio* sobre los pastos, cuya recaudación y contabilidad debía llevar el Interventor en cuenta separada para garantizar su aplicación al pago de reintegros y reducción de los capitales tomados a censo y para justificar, ante el Consejo, la adecuada inversión de sus caudales.

En realidad, el *sobrearbitrio*

2.3.3.5. — *Traspaso de la Fábrica. Nuevo destino para los productos del arbitrio*

126 AHN, Consejos, 2143. Resolución del Consejo de 26 de febrero de 1780.
127 AHA, 21/4. Rendición de cuentas de la Junta en Avila a 30 de mayo de 1780.
128 Idem.

Para conocer la distribución del resumen consultarse el tomo 1 de la obra de A. G. de la Torre, *La Junta de Sevilla, 1780-1781*, pp. 10-11.

Para conocer la distribución anual del producto de pastos de los baldíos puede servirnos, como ejemplo,

- Sueldos
- Gastos

129	• Sueldos	5.483 reales
	• Gastos extraordinarios	3.820 reales
130	• 1/5 para Univ. Tierra	11.697 reales
	• Invertido en la fábrica	21.005 reales
	Total	

34 46.788 reales
 por, 2143, testimonio de D. Miguel Mendiñeta, comisionado al efecto por el Consejo de 7 de diciembre de 1787.

las negociaciones fracasaron¹³¹ y la Junta decidió traspasar la fábrica, con todos sus géneros y enseres, a D. Francisco Solernou, catalán establecido en Avila desde los años sesenta, comerciante, prestamista, revendedor de lanas y promotor en 1786, desde su cargo de Procurador Síndico del Común, de la creación en la ciudad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ya había establecido en 1775, en la calle de Santo Domingo, un taller en el que funcionaban cuatro telares de paños¹³². El catalán arrendó el molino de Adaja, el batán, la oficina de tintes y la casa-fábrica en 300 ducados y se hizo cargo de todos sus géneros y efectos en un precio de 36.000 reales a pagar en un plazo de diez años a la ciudad¹³³.

La medida, una vez más, apenas satisfacía a nadie y las protestas surgieron por doquier. Los Procuradores de la Tierra pretendían aplicar los caudales del sobrearbitrio a la redención definitiva de los censos, tomados con motivo de la Extraordinaria Contribución de 1780, y los fondos existentes del arbitrio y los que existieran en el futuro para hacer frente a los gastos ordinarios de los pueblos y para atender al pago del alcance — 140.000 reales — que la Universidad de la Tierra estaba adeudando de nuevo a su depositario¹³⁵. Los regidores del Ayuntamiento de Avila querían hacer valer la orden de 1778 por la que se había mandado aplicar el arbitrio, durante veinte años, a la fábrica de papas para reintegrar a la ciudad los caudales de Propios que se habían invertido en la nufactura¹³⁶. En cualquier caso, parecía claro que la Junta de Fábricas debía cesar en la administración del producto de los pastos y pasar ésta a la Junta de la Universidad de la ciudad y Tierra de Avila. En consecuencia, el 6 de noviembre de 1788 la Junta de Fábricas entregó a D. Josef de la Taxada, depositario de la Tierra, a través del Intendente Blas Ramírez, la cantidad de 119.261 reales 17 maravedís existentes en aquel momento en las arcas del arbitrio de los baldíos¹³⁷.

Su destino, olvidada la aplicación en exclusiva al arreglo de puentes y caminos, entre concretaba definitivamente en la atención a los gastos ordinarios de la comunidad, entre los que se incluían, lógicamente, la composición de puentes y caminos, pero también los arreglos del cuartel, repartimientos, alojamientos, víveres, contribuciones extraordinarias

En cuanto a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, se negaron a tomar por su cuenta la fábrica de Avila, tanto por su estado y la clase de sus manufacturas, como porque ya llevaban a su cargo las fábricas de Talavera, Valencia, Murcia, Ezcaray, Cuenca y la de sombreros de San Fernando. Recomendaban el traspaso a personas particulares. AHN. Consejos, 2143.

133 AHPA, Ayto., C 119 42/4.

135 AHA, L 21/7. Representación de 27 de junio de 1790.

136 AHPA, Ayto. Actas, 176.

¹³⁷ AHN, Consejos, 2143. Comunicación de Blas Ramírez a la Junta de Fabricas de Isona e de Molins de Rei.

y todas aquellas cargas a que estaba obligada la Universidad de la ciudad y Tierra de Avila. Y ese sería el destino futuro del arbitrio, no sin que una y otra comunidad discreparan con frecuencia sobre su aplicación, reclamaran y pretendieran aprovechar en beneficio propio el producto de los pastos¹³⁸. Pero ya nunca en adelante, hasta la descomposición de la Universidad en 1837, se plantearían con tanto ardor los enfrentamientos que por el manejo del arbitrio y la administración de sus productos se produjeron entre diversos grupos de la ciudad y Tierra durante el último cuarto del siglo XVIII.

3.—ENFRENTAMIENTO DE INTERESES POR EL ARBITRIO DE LOS BALDIOS

Parece claro, después de lo expuesto en las páginas anteriores, que la imposición del arbitrio sobre los baldíos, allá por el año 1770, no sólo restringió los pretendidos derechos de ciertos ganaderos abulenses que habían monopolizado desde siempre el aprovechamiento gratuito de los pastizales, sino que creó, al mismo tiempo, una fuente imborrable de dinero cuya recaudación y administración ofrecía en Avila a quienes lo ambicionaran posibilidades de riqueza, de prestigio y de poder. Es lógico, pues, que en esas circunstancias surgieran en la ciudad tensiones y enfrentamientos entre personas o grupos de personas interesados en controlar, en beneficio propio, tan atrayentes posibilidades.

Los primeros en protestar fueron los ganaderos. Y más concretamente los ganaderos poderosos, dueños de grandes rebaños, que no sólo fueron privados de la gratuidad de los pastos para sus ganados —lo que se traducía, obviamente, en una merma importante en sus economías— sino que hubieron de someterse en los repartimientos, en los cupos y en la administración de los pastizales a los procuradores de la Tierra y a su designio. Su portavoz era D. Miguel Francisco del Llano, ganadero, revendedor de lanas y regidor perpetuo de la ciudad, apoyado en los administradores del Duque de la Roca o del Marqués de Los Llanos y en otros ganaderos ricos y en arrendatarios poderosos. Salvo conspirar con el Depositario de la Tierra, D. Josef de la Taxada, para introducir más ganados que los contratados o pagar menos dinero de lo debido, apenas pudieron conseguir cosa alguna de interés. Al final, como ya sabemos, ocurrió que los vecinos más ricos llegaron a ser excluidos de los privilegios que proporcionaba la vecindad respecto al aprovechamiento de los pastos. Sus protestas infructuosas se unieron después a la oposición de todo aquel que se viera perjudicado por la imposición del arbitrio o por el desdén dado a su caudales.

A partir de 1777, esa oposición estuvo protagonizada fundamentalmente por los Procuradores de la Tierra, legítimos defensores de los intereses de los pueblos, que se vieron perjudicados claramente por la decisión de aplicar el producto del arbitrio a la financiación de la fábrica de paños. Los vecinos no sólo tuvieron que seguir soportando como antes los repartimientos de martiniega sino que se vieron obligados además a pagar el coste de los pastos para sus ganados. Y, paradójicamente, los Procuradores de la Tierra encontraron aliados, para sus reivindicaciones, en los regidores perpetuos de la ciudad, representantes de la vieja oligarquía local, porque la aplicación del producto del arbitrio a la fábrica de paños inscribió la problemática de su manejo y administración en el am-

plio marco del conflicto de intereses suscitado en Avila por el manejo y administración de los bienes todos de la ciudad.

En efecto, el Ayuntamiento de Avila había quedado reducido en los años setenta a la existencia de sólo cinco regidores perpetuos —D. Agustín Vélez Vela, D. Manuel Guillamas Verdugo, D. Francisco de Revenga, D. Joaquín Agüero como teniente y administrador del Marqués de Las Navas y D. Manuel del Llano como administrador del Conde de La Coruña—, y tan escaso número resultaba claramente insuficiente para desempeñar con desahogo todas las funciones que tenían encomendadas. Por tal motivo, a propuesta del nuevo Corregidor, D. Miguel Fernández de Zafra, el Consejo aprobó, por Auto de 3 de mayo de 1776, el nombramiento de seis regidores trienales, renovables cada año dos a dos, de precisa residencia en la ciudad y asistencia obligada a los Ayuntamientos, que había de elegirse entre los vecinos de la misma forma que se elegían los diputados y el personero del común¹³⁹. Los primeros regidores trienales fueron: Bernardino Sánchez Mayoral, guarda de la renta del tabaco; José Sancho, labrador y ganadero; Fernando Jimeno, administrador de la alhóndiga; Francisco Hurtado, obligado de la renta del aguardiente; Pedro Celestino López, depositario del penas de cámara; y Bernardino Jiménez, cerero y confitero¹⁴⁰.

Al nombramiento se opuso el Procurador Síndico General del Común de ambos estados, D. Antonio Zorrilla, que propuso infructuosamente al Consejo que la elección se hiciera entre los nobles naturales y domiciliados en la ciudad o, en todo caso, a partes iguales entre nobles y plebeyos¹⁴¹. Y se opusieron, posiblemente, con más justificación los regidores perpetuos del Ayuntamiento: no había ninguno de los seis regidores elegidos que, a su parecer, no tuviera tachas para ejercer su cargo con su dignidad. En unos casos, porque eran labradores y ganaderos, en otros por no tener título alguno de nobles, y en otros por tener comercio y granjerías. En resumidas cuentas, su oposición no se dirigía contra las personas concretas que habían sido elegidas, sino contra la decisión del Consejo de que se eligieran, porque sus excepciones y trabas eran tantas que, en caso de tomarlas en consideración, no habría persona en Avila, sino ellos, que pudiera acceder al cargo de regidor.

Su oposición, o su resentimiento, desembocó en enfrentamiento abierto con ocasión del establecimiento de la fábrica de paños y la creación de la Junta económica correspondiente. Como comisionados del Ayuntamiento en dicha Junta fueron nombrados D. Manuel Verdugo y Guillamas y D. Joaquín Miguel Agüero, ambos regidores perpetuos de la ciudad, pero por muerte de aquel y por destitución de éste los cargos recayeron en D. Fernando Jimeno, D. Bernardino Jiménez y D. Julián Sáez Carrasco¹⁴². De esta forma los regidores trienales coparon las comisiones de la Junta de Fábricas y, lo que era más importante, se convirtieron en administradores de los bienes propios de la ciudad que había mandado el Consejo invertir en la manufactura. En realidad había ocurrido lo que se necesitó dinero contante y sonante para pagar la compra de lanas preque, cuando se inició la manufacturación, D. Joaquín Miguel Agüero, miembro de la Junta de Propios, se había negado a facilitar las llaves del archivo. El Corregidor Zafra actuó entonces con contundencia, descerrejó el arca donde se custodiaban los caudales y se

¹³⁹ La elección de Diputados y Síndico Personero del Común estaba regulada por Auto del Consejo de 5 de mayo de 1766, cap. 5-8, ley I, Tit. XVIII, lib. VII, Novísima Recopilación MANGAS NAVAS, J.M.: "Régimen Comunal agrario de los Concejos de Castilla", Madrid, 1981, p. 113.

¹⁴⁰ AHN, Consejos, 1279, f.º 74. AHPA, Ayto. Actas, 164, 12 de junio de 1776.

¹⁴¹ Ibídem, denegación del Consejo por Auto de 2 de Octubre de 1776.

¹⁴² AHN, Consejos, 915, f.º 74 ss.

¹³⁸ CERVERA VERA, L.: "La Plaza Mayor de Avila (Mercado Chico)", Avila, 1983, p. 62, 63, 66. AHN, Consejos, 1678, Representación de la ciudad de 24 de abril de 1801.

hizo cargo de los caudales existentes¹⁴³. Zafra recibió por su acción la reprimenda del Consejo, pero la fábrica se puso en marcha. Y si esto fue así, movidos los regidores perpetuos por los celos y la desconfianza, resulta fácil comprender la oposición suscitada cuando a la administración de los bienes de Propios se añadió a la Junta de Fábricas la administración de los pastos de los baldíos¹⁴⁴.

En el fondo, y aunque podamos pecar por exceso de simplificación, todo se reduce al centralismo borbónico, a la pugna sostenida entre los elementos representativos por señores y eclesiásticos, en su afán de

A la cabeza del reformismo se encontraba el Corregidor, D. Miguel Fernández de Zafra, llegado a Avila en 1776¹⁴⁶. Su diagnóstico de la situación socioeconómica que padecía la ciudad era certero y concluyente: "...el exponente —dice— vino a esta ciudad con el convencimiento de su decadencia y miseria, proveniente de las más oportunas injurias para emprender su restablecimiento. Juzgó hallar un pueblo desolado por la esterilidad de las cosechas y lo que halló fue un pueblo rico, tiranizado y saqueado; y esta situación le hizo comprender que el medio de recobrar sus fuerzas no consistía en granjearle caudales, sino en remover de su administración y manejo a los que se los usurpaban, ponerlos en seguro, y destinarlos donde se volviesen a convertir en subsistencia, de suerte que el Pueblo hiciese como granjería de sus contribuciones, haciéndoles servir de un fondo de comercio en que cada uno se interesase a medida de su industria y aplicación..."¹⁴⁷. Sus acusaciones fueron duras y contundentes: "los poderosos —denunciaba— son los autores de la miseria y defensores del desorden con la que habían de perpetuar; lo que quieren y lo que conviene a sus máximas es un pueblo abatido y miserable, es mantener el despotismo, es querer que el pueblo no tenga del bien y de la verdadera felicidad..."¹⁴⁸. Su apoyo, el nombramiento de los regidores trienales "hijos de la patria que, acercándose a conocer el gobierno y los verdaderos principios de donde previenen los perjuicios pudieran por su interés propio con su zelo y con su autoridad tratar seriamente de su reforma" y mediatizar o contrarrestar la influencia de los poderosos¹⁴⁹. Su solución, el triunfo de la fábrica de paños, que debía proporcionar trabajo y riqueza al vecindario, para lo que necesitaba contar con todo el dinero disponible, tanto los fondos de los bienes propios del Ayuntamiento como los caudales del arbitrio de pastos de los baldíos, cuya recaudación y administración quedaba confiada a la Junta Económica de la Junta Económica.

143 Idem, 90 y ss.
144 AHPA, Ayto. A.
145

143 Idem, 90 y ss.
144 AHPA, Ayto. Actas, 168, fº 29, 165, 183.
145 EGIDO LÓPEZ, T.: "Las Élités de poder, el Gobierno y la oposición" en "Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, XXI: La Época de la Ilustración. El Estado y la Cultura (1759-1808)", Madrid, 1987, p. 134.
146 Sostiene Teófanés Egido que los corregidores son uno de los prototipos más expresivos del reformismo carlotercerista. Su creciente importancia se basa en "... el deseo gubernamental de contrarrestar el poder de las élites urbanas o locales, de mediatizar las posibilidades amparadas en los oficios enajenados y de contrarrestar las inmunidades de jurisdicciones exentas como la eclesiástica..." EGIDO LÓPEZ, T.: "Las élites..." op. cit., p. 137, 138.
147 AHPA, Ayto., C 122 43/10. Representación de Zafra de 13 de diciembre de 1777.
148 Ibidem.
149 Ibidem.

perjuicio en sus economías o detrimento de su poder. Agüero, Llano, el Contador de la Intendencia y Zorrilla se oponían al nuevo método de administración de rentas, copiado de Segovia y de Madrid, con el que se pretendían obtener más beneficios para el público¹⁵⁰; Agüero y Llano, como regidores perpetuos, y también Zorrilla, el procurador del Común, se opusieron al nombramiento de los regidores trienales; los procuradores de la Tierra, el Marqués de los Llanos, los vecinos mañeros y los ganaderos ricos se opusieron al repartimiento de pastos y al cambio de administración del producto de los Baldíos; a unos y otros se opusieron al establecimiento o desarrollo de la fábrica de paños y a la inversión en ella de los caudales de la ciudad y de los fondos del arbitrio de los pastos. Debido a tomar partido, se puso, salvo conta-

El Cabildeo eclesiástico, que no hubiera debido tomar partido, se puso, salvo raras excepciones¹⁵¹, al lado de los pobres tradicionales, exasperado por la presencia en Avila del Comisionado Menéndez Valdés¹⁵² para reunir los cinco hospitales, existentes en la ciudad, en un Hospital único y general¹⁵³. Primero se enemistó con el Ayuntamiento negando a sus capitulares el puesto que les correspondía en procesiones y recibimientos, y después, se opuso a cuantas reformas inspiraban en la ciudad el Consejo o el Corregidor. Su postura y la influencia y poder de sus opiniones fue decisiva para desacreditar ante el pueblo, indocumentado y analfabeto, las reformas emprendidas y demostrar su escasa utilidad.

El fracaso de la fábrica de paños dirigida por Patricio Boulger supuso, pues, el fracaso del reformismo de Zafra y de sus posturas agresivas. Cuando el Corregidor marchó de Avila para ocupar otro destino todo fue corriendo precipitadamente a la ruina¹⁵⁴ y eso, en la práctica, a los ojos del pueblo, era dar la razón a sus opositores. De la fábrica apenas quedaba otra cosa que la posibilidad de utilizar sus edificios en el futuro para instalar nuevos talleres y, mientras tanto, el Ayuntamiento se había quedado sin fondos, los pue-
blos de la Tierra no podían disponer del producto de los pastos y tenían que seguir sufriendo repartimientos para hacer frente a los gastos comunitarios, y los regidores trienales miembros de la Junta eran acusados de utilizar su cargo para enriquecerse, para cobrar elevados emolumentos y para menjar un beneficio propio los bienes de la comunidad¹⁵⁵.

Al final, como ya sabemos, los regidores trienales fueron excluidos de la comunidad, y se creó otra en la que se trataba de incluir, por sugerencia del Consejo, a todos los sectores implicados en las desavenencias anteriores: el Corregidor, el Ayuntamiento, el clero y los

[illegible]

151 "...Hay tambien hombres literatos y juiciosos que o se manifiestan con que su pueblo y los de su patria
ponde o condenaron abiertamente el acoloramiento injusto con que no debían...". Ibidem.

¹⁵² Ver DEMERGON, G.: "Don Juan Menéndez Valdés, correspondiente de la Real Academia de la Historia", *Revista de la Real Academia de la Historia*, t. 67, n.º 263, 1967.

"...Se acordaron el Reverendo Obispo y los Patrones educados de la villa de Burdeos, 1807.
"..."Se acordaron el Reverendo Obispo y los Patrones educados de la villa de Burdeos, 1807.
mantener el sistema antiguo y proporciones que les daba de ser requeridos y solicitados p
de plazas que havia... lo que importó en su consideración mucho más que el beneficio público a que se as-
piraba por mdio de la reunión..." AHPA, Ayto. C 122 43/10. Representación de Zafrá de 13 de diciembre de
1777.

¹⁵⁴ AHN, Consejos, 2142. Representación de Dowling de 2 de 1777.

¹⁵⁵ AHPA. Ayto. Actas, 168.

procuradores de la Universidad de la Ciudad y Tierra de Avila. Ellos se ocuparon de administrar la fábrica de paños hasta su traspaso y recaudar y gobernar el arbitrio de los pastos de los baldíos hasta que volvieron a ser administrados por la Junta de la Tierra, como lo habían sido antes de la existencia de la fábrica del Común.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La ciudad de Avila conoce, pues, durante la segunda mitad del siglo XVIII, al igual que otras muchas ciudades del interior de la Península, un interesante y dinamizador proceso de reformas y de transformaciones socioeconómicas que no siempre llegaron a cuajar. Surgieron, unas veces, como concreción local de los impulsos reformistas emanados de las más altas instancias del poder político durante el reinado de Carlos III y otras, como hemos comentado con anterioridad, por pura necesidad histórica, por evidente desgaste, agotamiento e inadecuación de los usos y costumbres que habían regido tradicionalmente las relaciones sociales y económicas en la vida de la ciudad. Hemos citado algunos ejemplos de interés: reunión de hospitales, nombramiento de regidores trienales, intentos de industrialización, ... Uno de los más significativos posiblemente sea, como hemos intentado demostrar, la imposición del arbitrio sobre los pastos de los baldíos y la problemática planteada por la inversión de sus productos en la fábrica de paños establecida en la ciudad.

En el fondo, lo verdaderamente interesante, tanto como la evaluación de los resultados tangibles de la reformas proyectadas, es la constatación de la existencia en la ciudad de proyectos de reforma y de grupos reformadores, aunque no consiguieran, en muchos casos, la cristalización de sus propósitos ni la consolidación de los cambios iniciados. En el caso concreto del arbitrio sobre los baldíos, su imposición tiene, en términos cuantitativos, una importancia limitada: el precio que se paga por cada cabeza de ganado no es más que la tercera parte de lo que pagaban los ganaderos por los pastos de las dehesas particulares, y su producto, al principio, sólo cubría el equivalente a los repartimientos de martiniega y, después, no llegó a representar más de la quinta parte del dinero total invertido en la fábrica de paños. Es, pues, en su significación cualitativa, en cuanto al fenómeno generador de cambios y transformaciones socioeconómicas, como adquiere su verdadera dimensión histórica el arbitrio sobre los baldíos. A todos los niveles. A nivel político porque la aplicación del arbitrio de pastos a la financiación de la fábrica de paños, faltando a la concordia de 1719, supone un intento más de consolidar la supremacía de la ciudad sobre la Tierra, un intento de desarrollar su economía a costa de los bienes y de los intereses de los pueblos que integraban la Universidad. A nivel social porque uno de los objetivos prioritarios del arbitrio sobre los pastos era acabar con el monopolio o con los privilegios de los poderosos y hacer partícipes a todos los ciudadanos de la ciudad y de la Tierra de los beneficios potenciales de la propiedad común. A nivel económico porque la inversión de sus productos en la fábrica de paños no es, en el fondo, otra cosa que la inversión de capital agrícola en la industria, fenómeno que ha estado presente, siempre y en todas partes, en los inicios de todo proceso de industrialización.

Obviamente, la inversión en la industria del producto del arbitrio de pastos no dio resultado alguno, porque la fábrica fracasó. Y el fracaso de la fábrica de paños, con todo lo que ello significa, es un símbolo evidente del fracaso generalizado de las posturas re-

formistas defendidas por el Corregidor Zafra y de sus posturas radicales. En adelante, las reformas que prosperaron o las que subsistieron durante algún tiempo lo hicieron en tanto en cuanto no se opusieron o no menoscabaron los intereses directos de los grupos dominantes, o en cuanto fueron aceptadas o reconducidas convenientemente por las élites de la ciudad. Hay suficientes datos para avalar semejante aseveración: la Junta de Fábricas, por ejemplo, estuvo constituida desde 1781 por representantes del Ayuntamiento —no ya por regidores trienales—, por los Procuradores de la Tierra y por dos representantes del clero de la ciudad; la Sociedad Económica de Amigos del País, promovida por el Procurador Síndico General del Común, estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis y varios de sus cargos directivos recayeron en miembros del Cabildo de la Catedral o en regidores perpetuos del Ayuntamiento; los informes para establecer en Avila la fábrica de algodón los recaba la Secretaría de Hacienda del propio Obispo y del Corregidor interino que era, a la sazón, como regidor decano, D. Joaquín Miguel Agüero, en su calidad de mayordomo y representante en la ciudad del Duque de Medinaceli, Marqués de Las Navas.

Son sólo algunos ejemplos, pero suficientemente significativos. Y, mientras tanto, los promotores del reformismo o las personas en quienes se apoyaron los reformadores —caso de Fernando Jimeno— no supieron estar, a la hora de la verdad, a la altura de las circunstancias y casi todos ellos se conformaron con ocupar puestos de cierta relevancia económica y social aunque por ello, como ocurrió en ciertas ocasiones, tuvieran que recurrir al fraude o servirse, para beneficio propio, de la parcela de poder que durante algún tiempo consiguieron disfrutar.

En definitiva, las reformas proyectadas e iniciadas en Avila durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron una existencia efímera y una escasa incidencia en la vida de la ciudad. Sirvieron, es verdad, para poner de manifiesto los defectos y las inadecuaciones de las viejas estructuras socioeconómicas, pero sus promotores no fueron capaces de alumbrar soluciones nuevas y diferentes. El final del Antiguo Régimen, aunque intuído, se perfilaba aún demasiado lejano en la ciudad.